



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0047/2017

FECHA: 04 de mayo de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0047/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. El pasado 17 de noviembre de 2016 el ahora reclamante, a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, presentó una solicitud de acceso a la información, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-, con relación a la obtención de

Conocer el número de personas en lista de espera para plaza de residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid en cada uno de los meses desde enero de 2015 a octubre de 2016, así como su espera media en días hasta su adjudicación.

Asimismo agradecería faciliten el número de altas y bajas (desglosadas por causas) en cada uno de los meses de dicho periodo

Habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno - en adelante, LTAIBG- sin recibir contestación alguna, el ahora reclamante entiende desestimada por silencio administrativo la solicitud de acceso a la información presentada y mediante escrito de 6 de febrero de 2017, e igual fecha de entrada en el Registro de este Consejo, presenta una reclamación al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG.

ctbg@conseiodetransparencia.es



2. El 6 de febrero de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

Mediante oficio de 28 de abril de 2017 del Secretario General Técnico de la Consejería de Políticas Sociales y de Familia se da traslado de las alegaciones a esta Institución, vía correo electrónico de 4 de mayo de 2017. En concreto, tras indicar que se ha solicitado el parecer de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor, se pone de manifiesto lo siguiente:

- No resulta procedente facilitar la información toda vez que el solicitante no cuenta con la condición de interesado, al no ser solicitante de un servicio de atención residencial para personas mayores. Asimismo, el centro directivo entiende que la información solicitada no está relacionada con el estado de tramitación de un concreto procedimiento administrativo ni con los requisitos jurídicos o técnicos de los mismos.
- No obstante lo anterior, señala que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula en su artículo 37 el sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Las cifras de altas y bajas se pueden consultar en el sitio "Portal de Dependencia" del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO): www.dependencia.imserso.es.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *"salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley"*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:



“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, tal y como se ha reseñado en los antecedentes de esta reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* - BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Con carácter preliminar debemos formular alguna consideración sobre la condición de interesado para ejercer el derecho de acceso a la información.

Tal y como dispone el artículo 12 de la LTAIBG, cuando aborda la regulación de la titularidad del derecho de acceso, el mismo puede ser ejercitado por cualquier persona: “Todas las personas tienen derecho a acceder a la Información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”. A mayor abundamiento, el artículo 17, al regular el contenido de la solicitud de acceso a la información no prevé que la misma haya de motivarse o fundarse en motivo alguno.

De estos preceptos se deduce que una de las novedades más importantes que ha incorporado la LTAIBG al Derecho Positivo consiste, precisamente, en que el ejercicio del derecho de acceso puede realizarse por cualquier persona sin necesidad de que tenga la condición de interesado en el procedimiento de que se trate. Como expresamente contempla el preámbulo de la LTAIBG, ésta “configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto



en la Constitución española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos”.

4. En segundo lugar, en cuanto al fondo del asunto planteado resulta conveniente precisar la naturaleza de la información solicitada. De acuerdo con ello, cabe recordar que, a tenor de su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto *“ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”*.

Su artículo 12, con esta finalidad, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la *“información pública”*, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la *“información pública”* como

“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

A tenor de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley.

Desde esta premisa, no parece suscitar demasiadas dudas que la información solicitada se trata de *“información pública”* a los efectos de la LTAIBG, en tanto y cuanto, por una parte, se ha obtenido en el ejercicio de las funciones que, a mero título orientativo, le atribuye a la Comunidad Autónoma el vigente ordenamiento jurídico en materia de prestaciones materiales del sistema público de servicios sociales -Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid-, y, por otra parte, la propia Comunidad de Madrid es un sujeto vinculado a la Ley de Transparencia según se deduce del tenor literal de su artículo 2.1.a).

Tomando en consideración que el objeto de la solicitud de acceso se trata de *“información pública”* a los efectos de la LTAIBG, así como el hecho de que la administración autonómica no ha planteado que concurra ninguna de las causas de inadmisión previstas en el artículo 18 de la Ley de Transparencia en la solicitud de referencia, así como tampoco la existencia de ninguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la misma LTAIBG, procede, en consecuencia, estimar la reclamación presentada por cuanto la pretensión versa sobre información pública en poder de un sujeto vinculado por la Ley de Transparencia.



III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada, por tratarse de información pública en poder de un sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno la administración.

SEGUNDO: INSTAR a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid a que en el plazo máximo de un mes proporcione la información solicitada y no satisfecha, remitiendo a este Consejo en igual plazo copia de la información trasladada al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez